

LA DÉCADA DE los noventa ha constituido, tanto en México como en el istmo centroamericano, un periodo de cambios profundos caracterizados por el contexto de liberalización económica y financiera; así como de integración regional con los Estados Unidos de América. La amplitud de estos cambios sólo puede apreciarse conociendo las realidades anteriores y las rupturas que introdujeron los nuevos paradigmas. Sin caer en la nostalgia, se consideran muchas veces los modelos actuales como referencias absolutas y no superables mientras las teorías económicas y sus políticas públicas derivadas se muestran efímeras e invitan a un análisis mucho más relativo de sus fundamentos.

LOS CAMBIOS A LA LUZ DE LA HISTORIA ECONÓMICA: UNA BREVE RESEÑA

En los años 1950 el enfoque keynesiano consideraba que las fallas de mercado resultaban de la falta de disponibilidad en el capital o más bien del bajo nivel del ahorro. Desde este punto de vista, el subdesarrollo económico era el resultado de un bajo nivel de inversión tanto a nivel micro como macro económico. No obstante, se admitía también que, en estos contextos, el impulso sobre la inversión no podía generarse por un aumento del ahorro ya que se consideraba que los pobres no eran capaces de ahorrar. En este contexto el crédito público aparece como el instrumento privilegiado de las políticas del desarrollo financiero para acompañar el crecimiento económico. En este periodo la prioridad no fue el fomento de una intermediación financiera sino la asignación de los recursos hacia actividades económicas excluidas por el sector bancario existente, en particular la producción agrícola destinada a la exportación. Considerando los intermediarios financieros inadecuados o inexistentes, se nacionalizaron bancos (India, Indonesia, México, etc.) o se crearon bancos de fomento y bancos de desarrollo agrícola.

Estas políticas fueron financiadas por un nivel de endeudamiento siempre más alto de los países del Sur. Sin embargo, en los años 1970, la crisis petrolera y la coyuntura económica agravaron el déficit de los países del Norte, en especial el de Estados Unidos. El alza de las tasas de interés volvió insostenibles las deudas contratadas a nivel internacional y generó la crisis de la deuda inaugurada por México en 1982. A la par, ante los problemas de administración del crédito público –altas tasas de no pago, etc.– y ante la deslegitimación del Estado en el pensamiento liberal, el “enfoque keynesiano” dejó lugar al “consenso de Washington”. La liberalización financiera vino a remover la visión de los sistemas financieros como parte integrante de las políticas de desarrollo económico.

La teoría de la “represión financiera” que surgió de los trabajos de MacKinnon (1973) consideraba que la capacidad de financiamiento de la inversión económica estuviera limitada por la inexistencia de mercados

eficaces para asegurar la intermediación de recursos entre agentes con superávit (ahorradores) y agentes con necesidad de liquidez (inversionistas). La inexistencia de tales mercados se debe, según esta corriente, “a políticas equivocadas de represión de tasas de interés y de crédito selectivo” (Studart 2005). De hecho, la intervención del Estado en el mercado financiero no se ve justificada por fallas de la intermediación financiera como una consecuencia de mercados incompletos, sino que la intervención del Estado indica precisamente que los mercados siguen siendo incompletos y que permanecen en un amplio sector financiero informal, cuya visión se ve confirmada por el informe anual sobre el desarrollo del Banco Mundial del año 1989 (*World Development Report 1989*).

Estas teorías sirvieron como fundamentos de las experiencias de reducción del papel del Estado y de las políticas de liberalización financiera de los fines de los años 1980. Las consecuencias económicas de estas políticas siguen siendo debatidas, pero se observa en muchos países una fuerte extraversion del sistema bancario que acompaña la apertura externa, así como una mayor inestabilidad financiera seguida, en varios contextos, por quiebras de bancos y recesión económica. La liquidación de la mayoría de los bancos de fomento en toda la Región, así como la crisis financiera de 1994 en México ilustran estas tendencias. Los sistemas financieros dejaron amplios sectores de las economías nacionales sin acceso a crédito bancario.

El paradigma del “neoinstitucionalismo” económico plantea desde los años 1970 que el mercado no se reduce a relaciones de precios y cantidades entre agentes sino que hay que incorporar el contexto institucional en el que opera el mercado. En esta visión se tiene que tomar en cuenta en el análisis del funcionamiento del mercado, aspectos que no se consideran centrales en el enfoque neoclásico: marco jurídico, estructuras de poder, acceso a la información y hasta las características del sistema político. Así, autores como Joseph E. Stiglitz, que criticaron la hipótesis de la distribución perfecta de la información, mostraron que existen problemas de distribución de recursos a largo plazo – racionamiento del crédito – causados por las fallas en la distribución de la información. El fenómeno de asimetría de información puede introducir ineficiencias en los mercados financieros: los prestadores tienen dificultades para diferenciar buenos proyectos – alto nivel de rentabilidad, bajo nivel de riesgo y bajo nivel de incumplimiento – y malos proyectos. Para protegerse del riesgo de selección adversa – selección de los malos proyectos – y del riesgo moral, la solución que escoge el prestador es imponer tasas de interés superior a la tasa de equilibrio del mercado, lo que induce una oferta de crédito reducida.

Ante estas fallas, aun más importantes en el medio rural, el Estado tiene un importante papel para mejorar la infraestructura institucional y compensar las fallas de mercado. Su papel se ve rehabilitado. También, estos análisis teóricos invitan a reconsiderar organizaciones colectivas informales que buscan dar acceso al crédito a los individuos que las constituyen. En este marco se presta atención a nuevos actores emergidos de acciones colectivas enfocadas hacia la reducción de riesgos y costos asociados a la actividad de servicios financieros para la población habitualmente excluida de ellos.

En este contexto, el movimiento de las microfinanzas, cuya bandera emblemática es el Grameen Bank de Bangladesh, forma parte de las nuevas dinámicas que apuntan a la reducción de la exclusión financiera de los pobres en cualquier lugar del mundo. A fines de los años 1990, el microcrédito logra un reconocimiento como parte de las políticas de reducción de la pobreza. No obstante, el sector de las microfinanzas es muy diverso. A la par de los movimientos históricos de las cooperativas financieras que se han organizado desde el final del siglo XIX en Europa y Canadá (Raiffeisen, Desjardins, etc.) a partir de la captación del ahorro local, formas más recientes de microfinancieras emergieron con el crédito solidario organizado a partir de grupos de fianza. Ahora, las experiencias pioneras se integran más en los sistemas financieros nacionales y, en las experiencias más comerciales, logran la figura jurídica de bancos como lo ilustra la experiencia de “¡Compartamos!” en México.

La repartición geográfica de esa oferta es aún heterogénea y cabe subrayar que queda baja en medio rural. En efecto, los obstáculos ante la implementación de servicios financieros en zonas remotas son enormes: baja densidad de población, costos de operación, bajo nivel de rentabilidad de actividades productivas, riesgos, etc., así que en estas zonas donde los desafíos son muy grandes se ha necesitado una intervención del Estado para promover la implementación de servicios financieros, como por ejemplo lo que se está desarrollando en México desde 2001 a través de los programas regionales de apoyo a las microfinanzas rurales (PATMIR). Sin embargo, puede mantenerse un alto nivel de exclusión financiera aunque exista una oferta de servicios financieros. Acceso a servicios financieros no significa ni implica uso de estos servicios: bajo nivel de educación, falta de información, o altos precios y/o costos constituyen obstáculos que conducen a la autoexclusión de parte de la población meta. Otros obstáculos tales como rechazo por diferentes razones (riesgos, discriminación social, racial, etc.) conlleva a lo que autores llaman *involuntary exclusion* (Claessens 2006).

La amplificación del fenómeno en el mundo se acompañó de la esperanza que el sector de las microfinanzas pudiera tener un papel central en la reducción de la pobreza. El impacto sobre el desarrollo a nivel macroeconómico ha sido muy limitado ya que en 47% de los países subdesarrollados, las microfinanzas atienden a no más del 2% de la población (en el 36% de los países la cifra es entre 0 y 1%) (Peachy & Roe 2006). Para México, un estudio concluye, en 2005, a una cobertura muy limitada del sector financiero en su conjunto: 25% de la población urbana y 6% de la población rural, con una cobertura mucho más baja en los Estados marginados del Sur que en los centros urbanos metropolitanos. El promedio de habitantes por sucursal va de 5 000 a 20 000, con un promedio nacional alrededor de 10 000 (Klaehn *et al.*, 2005).

Al nivel microeconómico, los obstáculos metodológicos así como la falta de estudios comparativos no permiten asegurar los resultados de los análisis de impacto llevados a cabo por los académicos; así que sigue el debate en cuanto al impacto positivo o negativo de esos servicios financieros sobre la vulnerabilidad y el bienestar de los pobres.

Sin embargo, el debate continúa entre los autores que piensan que el Estado debería limitarse a mejorar los mecanismos de distribución de la

información y fortalecer la regulación del sector y otros que consideran que el Estado debería intervenir directamente con instrumentos de fondeo, de garantía y de reducción de los costos de transacción a través de mecanismos redistributivos tales como la bonificación de las tasas de interés. En cuanto a la intermediación financiera, algunas políticas promueven una intervención directa mientras otras experimentan nuevas formas híbridas de articulación entre poderes públicos e instituciones privadas tipo “APP” (Alianzas Público Privadas).

Las nuevas organizaciones financieras son plurales en cuanto a sus orígenes sociales y se diferencian según los contextos locales. Se orientan por las necesidades de proveer servicios financieros (ahorro, préstamos, seguros, remesas, etc.) a los agentes económicos excluidos del acceso al sector bancario privado y tratan de resolver el doble desafío de crear estructuras adaptadas a las características de esta demanda y sostenibles.

En este contexto, este número de la revista *TRACE* busca estudiar con profundidad las tendencias recientes e ilustrar sus impactos sobre las dinámicas de desarrollo rural en México y en Centroamérica. Tras una o dos décadas de perspectiva, se puede ahora mostrar algunos avances. También el análisis comparativo puede enriquecerse con los contextos propios de cada uno con sus especificidades y para llegar a configuraciones diferentes entre los actores: Estado, actores nacionales e internacionales.

Para entender estos cambios se buscó un enfoque multidisciplinario, combinando los análisis económicos con enfoques sociológicos y antropológicos. También, se cruzó una perspectiva “positiva”, más analítica, con visiones de actores más normativos en cuanto al análisis de las tendencias y, sobre todo a su apreciación.

Estos cambios rápidos sobre los mercados financieros rurales no se pueden entender sin un análisis de los cambios y evoluciones inducidos por el contexto de liberalización económica del sector agropecuario. Sobre este particular, el número enfoca el contexto mexicano después de la apertura del ALENA. El artículo introductorio de Éric Léonard, Bruno Losch y Fernando Rello analiza en particular cómo la economía rural se recompuso en este periodo y cuáles fueron las mutaciones de la acción pública.

Para profundizar en el análisis de los mercados financieros rurales, los principales ejes que se abordan son los siguientes:

- Análisis del impacto de las políticas públicas sobre las recientes evoluciones del mercado de crédito rural.
- Evaluación de la eficiencia de los nuevos intermediarios en cuanto a la resolución de los problemas de liquidez a los cuales los productores se encuentran confrontados y posicionamiento en relación con los programas de subsidios públicos.
- Análisis de las repercusiones de estos cambios en términos de recomposición de los circuitos financieros privados o informales (prestamistas privados, transacciones ligadas, etc.).
- Apreciación por distintos actores de los efectos de estas nuevas fuentes financieras para acompañar la diversificación de las actividades económicas y la reducción de los riesgos en relación con otras alternativas tales como las migraciones.

Cuatro artículos indagan sobre la situación mexicana. El primero sobre el tema, autoría de Emmanuelle Bouquet, ofrece un panorama histórico de los cambios del financiamiento agropecuario con la reforma de la Banca pública de fomento y da un marco complementario del reto enfrentado por las fuentes alternativas, cooperativas o sociedades financieras que están emergiendo desde la década de los 1990. Después, dos textos profundizan la importancia creciente de las remesas, sus efectos y sus interacciones con las prácticas financieras y los organismos locales. El primero es de Rafael G. Reyes y de Alicia Sylvia Gijón-Cruz. Ambos analizan la problemática desde una perspectiva económica y profundizan en las relaciones entre migración y ocupación laboral en el caso de varias localidades del Estado de Oaxaca. El segundo de Christophe Paquette y Laure Delalande ofrece un análisis agrosistémico del impacto de cajas locales fuertemente articuladas con las remesas migratorias. Por último, el artículo de Gabriela Guzmán Gómez presenta monografías de experiencias de organizaciones sociales en relación con la problemática del acceso a servicios financieros en el Estado de Veracruz.

Dos textos permiten ampliar la visión hacia Centroamérica. El artículo de Johan Bastiaensen y Guy Delmelle analiza los desafíos de las nuevas finanzas rurales en el caso de Nicaragua. La síntesis crítica de Florent Bedecarrats sobre el libro de Michelle Deugd, Hans Nusselder, Iris Villalobos e Ignacio Fiestas permite profundizar la evolución de las políticas públicas y de los servicios financieros rurales en Mesoamérica.

Esta visión de conjunto no hubiera sido posible sin la participación de muchos de los colaboradores. Queremos agradecer a los autores por sus contribuciones así como a los evaluadores que ayudaron a mejorar la calidad de los artículos.

François Doligez
(IRAM-Universidad Rennes 1, Francia)
Solène Morvant
(LEFI, Universidad Lyon 2, Francia)

Bibliografía

- Claessens, Stijn 2006 - Access to Financial Services: a Review of the Issues and Public Policy Objectives. *The World Bank Research Observer* 21 (2), pp. 207-240.
- Klaehn, Janette, Brigit Helms & Rani Deshpande 2005 - *Mexico, Country-Level, Savings Assessment*. Informe CGAP.
- McKinnon, Ronald I. 1973 - *Money and Capital in Economic Development*. Brookings Institution Press, Washington.
- Peachey, Steve & Adam Roe, 2006 - Access to Finance: what does it mean and how do Savings Banks Foster access. World Savings Bank Institute, January.
- Studart, Rogério 2005 - El Estado, los mercados y el financiamiento del desarrollo. *Revista de la CEPAL* 85, abril.
- World Development Report 1989 - *Financial Systems and Development*. Oxford University Press, New York for The World Bank.

LA DÉCENNIE DES années 1990 a été, tant au Mexique que dans l'isthme centraméricain, une période de profonds changements caractérisée par un contexte de libéralisation économique et financière ainsi que d'intégration régionale avec les États-Unis d'Amérique. Pour pouvoir apprécier l'amplitude de ces changements, la connaissance des réalités antérieures et des ruptures qui ont introduit les nouveaux paradigmes est primordiale. Sans tomber dans la nostalgie, les modèles actuels sont souvent considérés comme des références absolues et impossibles à dépasser alors que les théories économiques et les politiques publiques qui en découlent se révèlent éphémères et invitent à une analyse beaucoup plus relative de leurs fondements.

LES CHANGEMENTS D'APRÈS L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE : UN BREF APERÇU

Dans les années 1950, l'optique keynésienne considérait que les problèmes de marché provenaient du manque de disponibilité de capital ou plutôt de l'insuffisance de l'épargne. De ce point de vue, le sous développement économique était le résultat d'un investissement faible tant au niveau micro que macro économique. Cependant, on admettait aussi que, dans un tel contexte, l'impulsion donnée à l'investissement ne pouvait provenir d'une augmentation de l'épargne puisque les pauvres n'avaient pas la possibilité de faire des économies. Le crédit public apparaissait donc comme l'instrument privilégié des politiques de développement financier pour accompagner la croissance économique. Durant cette période, la priorité n'était pas à l'impulsion d'une intervention financière mais plutôt à l'attribution des ressources à des activités économiques exclues du secteur bancaire existant, en particulier la production agricole destinée à l'exportation. Les intermédiaires financiers s'étant révélés inadéquats ou inexistantes, on nationalisa certaines banques (Inde, Indonésie, Mexique, etc.) ou on créa des banques de développement agricole.

Le financement de ces politiques eut pour résultat un niveau d'endettement toujours plus élevé des pays du Sud. Par ailleurs, dans les années 1970, la crise pétrolière et la conjoncture économique aggravèrent le déficit des pays du Nord, en particulier celui États-Unis. La hausse des taux d'intérêt

rendit insoutenable le remboursement des emprunts contractés au niveau international et provoqua la crise de la dette inaugurée par le Mexique en 1982. En même temps, face aux problèmes d'administration du crédit public – taux élevé de non paiement, etc. – et face à la délégitimation de l'État dans la pensée libérale, l'« optique keynésienne » céda la place au « consensus de Washington ». La libéralisation financière vint effacer la vision des systèmes financiers comme partie intégrante des politiques de développement économique.

La théorie de la « répression financière » née des travaux de MacKinnon (1973) considérait que la capacité de financement de l'investissement économique serait limitée par l'inexistence de marchés efficaces pour assurer l'intermédiation des ressources entre les agents avec excédent (épargnants) et les agents ayant besoin de liquidités (investisseurs). L'inexistence de tels marchés est due, d'après cette approche, « à des politiques erronées de répression de taux d'intérêt et de crédit sélectif » (Stuart 2005). En fait, l'intervention de l'État dans le marché financier ne semble pas être justifiée par les problèmes de l'intermédiation financière qui seraient la conséquence de marchés incomplets, par contre elle indique précisément que les marchés continuent à être incomplets et restent dans un ample secteur financier informel. Cette vision se trouve confirmée par le rapport annuel sur le développement de la Banque mondiale en 1989 (*World Development Report*, 1989).

Ces théories servirent de base aux expériences de réduction du rôle de l'État et des politiques de libéralisation financière à la fin des années 1980. Le débat sur les conséquences économiques de ces politiques demeure d'actualité mais on observe dans de nombreux pays une forte extraversion du système bancaire accompagnant l'ouverture à l'extérieur, ainsi qu'une plus grande instabilité financière suivie, dans divers contextes, de faillites bancaires et de récession économique. La liquidation de la plupart des banques de développement dans toute cette région, tout comme la crise financière de 1994 au Mexique, illustrent ces tendances. Les systèmes financiers laissèrent de nombreux secteurs d'activité des économies nationales sans accès au crédit bancaire.

Le paradigme de l'économie néo-institutionnelle affirme depuis les années 1970 que le marché ne se réduit pas à des rapports de prix et quantités entre agents et propose d'incorporer le contexte institutionnel à l'analyse du marché. Selon cette vision il faut tenir compte dans cette analyse des aspects qui ne sont pas considérés comme centraux dans l'optique néoclassique : cadre juridique, structures de pouvoir, accès à l'information et même les caractéristiques du système politique. Ainsi, des auteurs comme Joseph E. Stiglitz, qui ont critiqué l'hypothèse de la distribution parfaite de l'information, ont montré qu'il existe des problèmes d'attribution des ressources à long terme – rationnement du crédit – causés par des failles dans la transmission de l'information. Le phénomène d'asymétrie de l'information peut introduire des inefficacités dans les marchés financiers : les prêteurs ont des difficultés à différencier les bons projets – haut niveau de rentabilité, bas niveau de risque et bas niveau d'inaccomplissement – des mauvais projets. Pour se protéger des risques d'erreur dans la sélection – choix de mauvais projet – et du risque moral, la solution choisie par le

prêteur est d'imposer un taux d'intérêt supérieur au taux d'équilibre du marché, ce qui mène à une diminution de l'offre de crédit.

Face à ces problèmes, encore plus importants en milieu rural, l'État a un rôle important à jouer pour améliorer l'infrastructure institutionnelle et compenser les failles de marché. Son rôle se voit ainsi réhabilité. Ces analyses théoriques invitent aussi à reconsidérer les organisations collectives informelles qui cherchent à ce que les individus qui les constituent aient de nouveau accès au crédit. Dans ce cadre, sont pris en considération de nouveaux acteurs surgis des actions collectives tournées vers la réduction des risques et des coûts, associés à l'activité de services financiers en faveur des populations qui en sont habituellement exclues.

Dans un tel contexte, l'émergence de la microfinance, dont l'expérience emblématique est la Grameen Bank au Bangladesh, prend part aux nouvelles dynamiques visant la diminution de l'exclusion financière des pauvres partout dans le monde. À la fin des années 1990, le microcrédit est enfin reconnu comme faisant partie des politiques de réduction de la pauvreté. Cependant, le secteur de la microfinance reste très divers. En même temps que les mouvements historiques des coopératives financières qui se sont organisées depuis la fin du XIX^e siècle en Europe et au Canada (Raiffeisen, Desjardins, etc.) à partir de la collecte de l'épargne locale, des formes plus récentes d'institutions de microfinance se sont créées grâce au crédit solidaire. De nos jours, les expériences pionnières s'intègrent davantage dans les systèmes financiers nationaux et, dans les expériences plus commerciales, elles obtiennent la figure juridique de banques comme l'illustre bien l'expérience de « *iCompartamos!* » [Partageons !] au Mexique.

La répartition géographique de cette offre est encore hétérogène et il convient de souligner qu'elle est toujours faible milieu rural. En effet, les obstacles à l'installation de services financiers dans les zones reculées sont énormes : basse densité de population, coûts d'opération, bas niveau de rentabilité des activités productives, risques, etc. C'est ainsi que dans ces zones où les enjeux sont très forts, une intervention de l'État s'est avérée nécessaire pour promouvoir l'implantation de services financiers, preuve en est l'effort de développement en train de se réaliser au Mexique depuis 2001 grâce aux programmes régionaux d'appui à la microfinance rurale (PATMIR). Mais cela n'empêche pas que continue à subsister un haut niveau d'exclusion financière malgré l'existence d'offre de services financiers. En effet, avoir accès à ces services ne signifie pas et n'implique pas forcément leur usage : un niveau de formation insuffisant, un manque d'information ou des prix et/ou coûts élevés constituent des obstacles qui conduisent à l'auto-exclusion de la part des population intéressées. D'autres obstacles tels que le rejet pour différentes raisons (risques, discrimination sociale, raciale etc.) provoquent ce que les auteurs appellent « *involuntary exclusion* » [exclusion involontaire] (Claessens 2006).

L'ampleur de ce phénomène dans le monde s'accompagne de l'espoir que le secteur de la microfinance puisse jouer un rôle central dans la réduction de la pauvreté. L'impact sur le développement au niveau macroéconomique est très limité car dans 47% des pays sous développés, la microfinance ne touche pas plus de 2% de la population (dans 36% des pays le chiffre oscille entre 0 et 1%) (Peachy & Roe 2006). Pour le Mexique, une étude

réalisée en 2005, montrait une couverture très limitée du secteur financier dans son ensemble : 25% de la population urbaine et 6% de la population rurale, avec une couverture plus basse encore dans les états marginés du Sud que dans les centres urbains métropolitains. La moyenne des habitants par succursale va de 5 000 à 20 000, avec une moyenne nationale autour de 10 000 (Klaehn *et al.* 2005).

Au niveau microéconomique, les obstacles méthodologiques tout comme le manque d'études comparatives ne permettent pas de confirmer les résultats des analyses d'impact effectuées par les universitaires ; se poursuit donc le débat au sujet de l'effet positif ou négatif de ces services financiers sur la vulnérabilité et le bien-être des pauvres.

Cependant, le débat continue entre les auteurs qui pensent que l'État devrait se limiter à améliorer les mécanismes de transmission de l'information et renforcer la régulation du secteur, et d'autres qui considèrent que l'État devrait intervenir directement grâce à des instruments de création de fonds, de garantie, de réduction de coûts de transaction à travers des mécanismes de redistribution tels que la bonification des taux d'intérêts. Quant à l'intermédiation financière, certaines politiques sont plus favorables à une intervention directe alors que d'autres expérimentent de nouvelles formes hybrides d'articulation entre les pouvoirs publics et les institutions privées comme les « PPP » (Partenariats publico-privés).

Les nouvelles organisations financières sont plurielles quant à leurs origines sociales et se différencient suivant les contextes locaux. Leur orientation dépend de la nécessité de fournir des services financiers (épargne, prêts, assurances, transferts, etc.) aux agents économiques exclus de l'accès au secteur bancaire privé en essayant de résoudre le double défi de créer des structures adaptées aux caractéristiques de cette demande et qui soient en même temps durables.

Dans ce contexte, ce numéro de la revue *TRACE* cherche à étudier en profondeur les tendances récentes et à illustrer leurs impacts sur les dynamiques de développement rural au Mexique et en Amérique centrale. Deux décennies de recul autorisent à analyser les progrès réalisés. L'analyse comparative peut aussi s'enrichir des contextes propres à chacun avec ses spécificités et parvenir à des configurations différentes entre les différents acteurs : État, acteurs nationaux et internationaux.

Pour comprendre ces changements nous nous appuyons sur une approche pluridisciplinaire combinant les analyses économiques à partir d'une optique sociologique et anthropologique couplée à une approche « positive » ; les articles rassemblés dans ce numéro permettent de faire ressortir les tendances récentes et d'en évaluer les effets.

Ces transformations rapides sur les marchés financiers ruraux ne peuvent être comprises sans une analyse des changements et évolutions provoqués par le contexte de libéralisation économique du secteur agricole. À ce sujet, ce numéro de *TRACE* s'intéresse à la conjoncture mexicaine après l'ouverture de l'ALENA. L'article introductif d'Éric Léonard, Bruno Losch et Fernando Rello analyse en particulier comment l'économie rurale se reconstitue à ce moment-là et quelles furent les mutations de l'action publique.

Pour approfondir l'analyse des marchés financiers ruraux, les principaux axes abordés sont les suivants :

- Analyse de l'impact des politiques publiques sur les récentes évolutions du marché de crédit rural.
- Évaluation de l'efficacité des nouveaux intermédiaires quant à la résolution des problèmes de liquidités auxquels les producteurs se trouvent confrontés et leur positionnement par rapport aux programmes de subventions publiques.
- Analyse des répercussions de ces changements en termes de recomposition des circuits financiers privés ou informels (prêteurs privés, transactions liées, etc.).
- Appréciation par les différents acteurs de ces nouvelles sources financières pour accompagner la diversification des activités économiques et la réduction des risques en relation avec d'autres alternatives telles que les migrations.

Quatre articles enquêtent sur la situation mexicaine. Le premier, d'Emmanuelle Bouquet, offre un panorama historique des changements du financement agricole avec la réforme de la Banque publique de développement et offre une vision complémentaire du défi posé aux sources alternatives, coopératives ou sociétés financières apparues depuis la décennie des années 1990. Ensuite, deux textes approfondissent l'importance croissante des transferts, leurs effets et interactions sur les pratiques financières et les organismes locaux. Dans le premier, Rafael G. Reyes et Alicia Sylvia Gijón-Cruz analysent la problématique à partir d'une perspective économique et creusent les relations entre migration et occupation professionnelle de plusieurs localités de l'état de Oaxaca. Dans le deuxième, Christophe Paquette et Laure Delalande offrent une analyse agrosystémique de l'impact des microbanques locales fortement liées aux transferts des émigrants. Enfin, dans son article, Gabriela Guzmán Gómez présente des monographies d'expériences d'organisations sociales en rapport avec la problématique de l'accès aux services financiers dans l'état de Veracruz.

Deux textes permettent d'étendre la vision à l'Amérique centrale. Johan Bastiaensen et Guy Delmelle analysent les défis des nouvelles finances rurales dans le cas du Nicaragua. Le compte rendu critique de Florent Bedecarrats sur le livre de Michelle Deugd, Hans Nusselder, Iris Villalobos et Ignacio Fiestas permet d'approfondir l'évolution des politiques publiques et des services financiers ruraux en Mésoamérique.

Cette vision d'ensemble n'aurait pu être possible sans la participation de nombreux chercheurs. Nous tenons à remercier ici les auteurs pour leurs contributions ainsi que les évaluateurs qui ont aidé à l'amélioration de la qualité des articles.

François Doligez
(IRAM-Université de Rennes 1, France)
Solène Morvant
(LEFI-Université de Lyon 2, France)